



Boletín Referencias nº 19

FLAPE

Foro Latinoamericano de Políticas Educativas

LA MOVILIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES SECUNDARIOS EN CHILE

INVITACIÓN AL DEBATE



LA MOVILIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES SECUNDARIOS EN CHILE

INVITACIÓN AL DEBATE

El movimiento estudiantil secundario, conocido también como la ‘revolución de los pingüinos’, se constituyó en la mayor de las movilizaciones sociales estudiantiles desde el retorno a la democracia en 1990. Esta movilización generó una enorme adhesión en la opinión pública, provocó inquietud en las elites políticas y económicas, y despertó la sorpresa en el resto de América Latina, donde el ‘experimento’ chileno era visto como una experiencia exitosa y sin fisuras.

En el momento más álgido, estaban movilizados más del 80% de los estudiantes secundarios del país, involucrando establecimientos públicos y privados subvencionados por el Estado, convocando estudiantes de pequeños pueblos y de las principales ciudades del país y reuniendo en su seno a jóvenes de todas las corrientes políticas junto a quienes participan de pequeños colectivos o que no reconocen adscripción política alguna. La indiferencia inicial de las autoridades y la posterior suspensión del diálogo por parte del gobierno en respuesta a las ocupaciones de liceos y las protestas callejeras, lograron convertir el movimiento inicial de los liceos tradicionales de la ciudad de Santiago en una movilización de carácter nacional.

Su trascendencia debe ser vista no sólo en función de su convocatoria y de las particulares características como movimiento social (transversalidad, revocabilidad del mando de los voceros, participación constante de las bases estudiantiles, uso de las nuevas tecnologías, etc.), sino también de haber planteado lo que consideran una profunda *crisis de calidad y equidad* que atraviesa el sistema educacional chileno. Pues, pese a los buenos indicadores en cobertura y escolaridad, las desigualdades existentes en los resultados y en el acceso no parecen disminuir significativamente. Luego de más de una década de reforma educativa, con ingentes inversiones hechas desde el Estado, la escuela como institución social pareciera obstinada en reproducir las desigualdades de origen antes que contribuir a mitigarlas. El sistema escolar chileno es, como también se plantea, un espejo perfecto de la enorme segmentación social que se observa en la sociedad.

Sin embargo, estos síntomas estaban también presentes hace cinco o diez años. Por lo mismo, es pertinente preguntarse por qué en esta ocasión se genera un movimiento social de tal magnitud, protagonizado justamente por aquellos que se consideraba especialmente apáticos y sumidos en el individualismo. En ese sentido, la sorpresa fue generalizada, pues además de lo ya comentado, se tuvo que reconocer que estábamos frente a un sujeto social desconocido o, más bien, que las diferentes lecturas hechas hasta el momento sobre la juventud no habían logrado comprender las mutaciones vividas por este segmento de la población durante los últimos quince años. Sobre esto, aún resta mucho por conocer.

Retomando, se puede hipotetizar que aquello que explica este proceso de movilización está en el encuentro de este nuevo sujeto juvenil (que experimenta cotidianamente la desigualdad) con la *pérdida de legitimidad social* del discurso reformista en educación –en particular, entre los jóvenes-. La confianza de éstos en la voluntad y capacidad de las elites y del gobierno de llevar adelante los cambios parecía haberse acabado y, por consiguiente, desde un comienzo demandaron modificaciones efectivas. Por eso mismo, quizás, apuntaron al corazón mismo de la institucionalidad educacional, aquella que no había sido tocada en ninguno de los gobiernos de la Concertación por la Democracia.

Junto a demandas específicas, como son la gratuidad del pase escolar, eximirlos del pago por rendir la Prueba de Selección de Universitaria (PSU) o revisar la implementación de la Jornada Escolar Completa, surgieron como grandes objetivos la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), promulgada en 1990 por Pinochet a pocos días de abandonar el poder, y el término de la municipalización de la enseñanza (forma en que se descentralizó la educación en Chile a comienzos de la década del 80'). Eran, por cierto, temas que habían estado relativamente ausentes de la agenda política del conglomerado de gobierno, y que tampoco estaban en el programa de gobierno de la recién electa Presidenta socialista Michelle Bachelet.

La necesidad de revisar la institucionalidad del sistema educacional, debido al nulo aporte del cuasi-mercado educativo en términos de calidad y equidad del sistema, permitió que las demandas estudiantiles se articularan con exigencias históricas provenientes de los docentes, estudiantes universitarios, un segmento de la intelectualidad y de actores sociales de la mayor diversidad. Finalmente, el gobierno accede a gran parte de las demandas específicas de los secundarios, y reconoce la legitimidad de discutir aquellos aspectos más estructurales planteados por el movimiento estudiantil. Es así como la Presidenta forma un Consejo Asesor, donde se discutirán justamente los temas de fondo planteados por los estudiantes, debiendo terminar su trabajo en un plazo no mayor de seis meses.

Este Consejo Asesor se ha dividido en tres comisiones: marco regulatorio del sistema educacional (LOCE); institucionalidad (descentralización y financiamiento, básicamente); y calidad educacional. La novedad de esta comisión es la activa participación de actores sociales tales como estudiantes secundarios, universitarios, docentes, apoderados, codocentes, dirigentes sindicales, entre otros. También lo hacen representantes de la Iglesia, de las Universidades, de organismos no gubernamentales, expertos en educación, de centros de estudio y personeros que participaron activamente en el diseño e implementación de la reforma.

La diversidad expresada en la composición de este Consejo Asesor, el hecho de ser una respuesta directa a la demanda social y el no estar obligados a concluir en acuerdos de consenso, convierten este espacio en un escenario novedoso y significativo para el fortalecimiento de la democracia y para legitimar la voz de los actores sociales en un plano de igualdad –al menos formal- respecto del saber técnico. En la práctica, se está convirtiendo en un lugar de confrontación de proyectos sociales y educativos profundamente antagónicos.

Junto al trabajo de esta comisión, la que está funcionando hace casi un mes, se han constituido foros regionales para discutir sobre la calidad de la educación, con activa participación de la ciudadanía. Asimismo, el 'Bloque Social' –conformado por los actores sociales que participan del Consejo Asesor- se encuentra organizando lo que esperan sea un Congreso Social de la Educación a realizarse en algunos meses más, donde esperan convocar a un espectro mucho más amplio de organizaciones y actores sociales. En suma, fruto de la movilización estudiantil se han organizado espacios de encuentro y debate, en un proceso que no se había visto durante la democracia, motivado por la preocupación de hacer respetar y de promover el derecho a una educación de calidad para todos.

Este es el contexto donde se enmarca este dossier sobre el debate educativo generado a partir de la gran movilización de los estudiantes secundarios de Mayo y Junio del 2006. En primer término, presentamos cinco documentos que abordan varios de los temas antes reseñados, éstos son: a) la propuesta de los estudiantes secundarios al gobierno, documento elaborado por los dirigentes de los principales liceos del país durante todo el 2005 y que sirvió de base para el petitorio presentado este año al gobierno; b) el documento del Colegio de Profesores de Chile "La Crisis del Sistema Educativo Chileno", presentado en Junio de este año y que resume la posición del gremio docente en torno al estado de la educación en Chile; c) el tercero es el ensayo de Eduardo Santa Cruz, secretario ejecutivo

de Flape-Chile, "Sobre la LOCE y el escenario actual"; d) también presentamos el documento del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH) de compilación de columnas de opinión aparecidas en la prensa chilena durante el período del conflicto; e) por último, los investigadores del OPECH Rodrigo Cornejo, Juan González y Rodrigo Sánchez, en su documento sobre el movimiento estudiantil, abordan sus principales características y lo que ellos consideran el momento instituyente abierto en el contexto de un modelo educativo dominado por políticas de mercado.

Finalmente, agregamos dos comentarios. El primero de ellos corresponde a Jorge Pavez. Presidente nacional del Colegio de Profesores, quien comenta sobre los principales desafíos que se abren en el nuevo escenario educativo en Chile y cuál es la posición del gremio docente al respecto. Segundo, El segundo comentario corresponde a la columna de opinión "¿Derecho a la educación o derecho a la exclusión?", aparecida en el vespertino La Segunda y escrita por María José Lamaitre, Secretaria Ejecutiva Comisión Nacional de Acreditación. En ésta, la autora plantea la necesidad de enfrentar decididamente la desigualdad social y el carácter reproductor del sistema escolar chileno, preguntándose – finalmente- si "no habrá llegado el momento de dar algunas peleas que consideramos justas, aun a riesgo de perderlas".

Eduardo Santa Cruz Grau

FLAPE – CHILE

Santiago, julio 2006